

Coyhaique, trece de septiembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

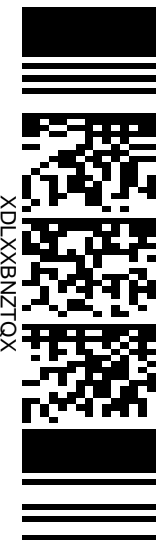
Que se ha alzado la presente causa, Rol Interno del Tribunal N° O-1539-2021, del Juzgado de Garantía de Coyhaique, Rol Único de Causa N° 2100507381-K, Rol Corte N° 171-2022, en apelación deducida por el abogado don Paulo Gómez Canales, Procurador Fiscal de Coyhaique, del Consejo de Defensa del Estado, en contra de la resolución de fecha 3 de agosto de 2022, mediante la cual, el Juez Suplente de dicho Tribunal, don Juan Patricio Silva Pedreros, declaró el abandono de la querella criminal presentada por dicha institución, en contra de doña Cecilia Eliana Urbina Pinto, solicitando el apelante, a este Ilustrísimo Tribunal, en definitiva, que se revoque la resolución apelada, y se declare que la querella no se encuentra abandonada y ordene fijar día y hora para la audiencia de preparación de juicio oral, según el artículo 261 del Código Procesal Penal.

Que, en audiencia de fecha 8 de septiembre de 2022, compareció a estrado, vía remota, por videoconferencia, sosteniendo el recurso, el abogado querellante, don Alejandro Castro Leiva, quien reiteró los argumentos contenidos en el mismo, como también el representante del Ministerio Público don Sebastián Vildósola Fica, y el abogado Defensor Penal Privado, don Francisco Ortega Acevedo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el apelante fundamentó su recurso, sosteniendo, en resumen, y luego de relatar las actuaciones desarrolladas en el juicio respectivo, que no es efectivo que exista una antinomia entre el artículo 261 y el 428, ambos del Código Procesal Penal, e incluso el Juez reconoce que esta última norma impide al querellante ejercer sus derechos y después dice que pudo ejercerlos desde marzo de 2022, incluso estando vigente una orden de no innovar decretada por la ltma. Corte de Apelaciones de Coyhaique.

Sostiene, que esta contradicción desconoce los principios del procedimiento, en cuanto el orden consecutivo para ejercer derechos,



y el artículo 261 establece que éstos se pueden ejercer hasta 15 días antes de la fecha de la audiencia de preparación de juicio oral. Ese es el plazo que tiene el querellante, por lo tanto nunca estuvo en condiciones de ejercer sus derechos.

Plantea, que el Tribunal estableció que, aunque se encontraba vigente una orden de no innovar, el querellante igualmente pudo ejercer sus derechos. Ello es contrario a la finalidad de la orden de no innovar, que es paralizar el proceso y cualquier actuación no es válida.

Refiere, que el Tribunal dijo que el querellante tuvo 5 días para ejercer sus derechos, desde el 15 de julio de 2022 hasta el 20 del mismo mes y año, lo que es errado porque la resolución de 15 de julio de 2022 no fijó la fecha de realización de la audiencia de preparación de juicio oral.

Expone, que no hay antinomia entre el artículo 261 y el 428 del Código Procesal Penal, porque el Tribunal se equivoca al interpretar dicha normas y debe hacerlo de tal forma que exista correspondencia y armonía, permitiendo soluciones correctas. Una de ellas reconoce las facultades del querellante que puede ejercer en el tiempo que indica, y la otra se lo impide. El Tribunal escoge la que impide ejercer el derecho. Debe escogerse la norma que permita el ejercicio de los derechos. No puede entenderse que la exclusión del querellante resulte más favorable al imputado, a la luz del artículo 93 del Código Procesal Penal.

Indica que, lo que se ha hecho es vulnerar garantías y derechos de la víctima, el Consejo de Defensa del Estado, según el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República.

Finalmente, sostiene que la resolución impugnada infringe el artículo 120, letra a), del Código Procesal Penal, ya que se hace alusión al derecho que establece el artículo 261 y no el artículo 428, puesto que éste no se refiere a los derechos del querellante, por lo tanto, se infringe el principio de legalidad.



Solicita, en definitiva, que se revoque la resolución apelada, y se declare que la querella no se encuentra abandonada y ordene fijar día y hora para la audiencia de preparación de juicio oral, según el artículo 261 del Código Procesal Penal.

SEGUNDO: Que, el Tribunal del grado, en síntesis, resolvió declarar el abandono de la querella deducida por el Consejo de Defensa del Estado, fundado en que el querellante pudo deducir acusación particular o adherir a la del Ministerio Público desde que se resolvió la admisibilidad de la Querella de Capítulos en marzo de 2022, sin perjuicio de la orden de no innovar, ya que esta última no impedía hacer la presentación y solo quedaría en *statu quo*. También pudo ejercer sus derechos en los 5 días que hubo desde que se recibieron los antecedentes hasta que se fijó la fecha de audiencia de preparación de juicio oral. Además, ante la contradicción de las normas, debe aplicarse el principio *in dubio pro reo*.

TERCERO: Que, de los antecedentes que se analizan, se pueden advertir las siguientes circunstancias:

- 1) Que, con fecha 17 de diciembre de 2021, el Consejo de Defensa del Estado deduce querella criminal en contra de Cecilia Eliana Urbina Pinto, por los delitos de prevaricación e infracción al artículo 38 de la Ley N° 20.000.
- 2) Que, con fecha 18 de marzo de 2022, el Ministerio Público deduce acusación fiscal en contra de Jorge Jesús Cáceres Osses y Cecilia Eliana Urbina Pinto, por delitos de revelación de secreto del artículo 38 de la Ley N° 20.000 y prevaricación, del artículo 224, número 7, del Código Penal.
- 3) Que, con fecha 29 de marzo de 2022, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique decreta orden de no innovar en la causa penal, con motivo de conocer la admisibilidad de una querella de capítulos.
- 4) Que, con fecha 30 de junio de 2022, el Tribunal de Alzada declara admisible la querella de capítulos.



5) Que, con fecha 15 de julio de 2022, se reciben los antecedentes en el Juzgado de Garantía de Coyhaique.

6) Que, con fecha 20 de julio de 2022, el Juzgado de Garantía cita a los intervinientes a audiencia de preparación de juicio oral, para el día 3 de agosto de 2022.

7) Que, con fecha 21 de julio de 2022, el querellante deduce reposición contra la resolución anterior, fijando la audiencia del día 3 de agosto para discutir dicha reposición y procedencia del abandono de la querella.

8) Que, en audiencia de 3 de agosto de 2022, el Tribunal de Garantía resuelve rechazar la reposición planteada por el querellante y declarar el abandono de la querella, por no haber adherido a la acusación fiscal o no acusar particularmente, según el artículo 120, letra a), del Código Procesal Penal.

CUARTO: Que, de acuerdo a los hechos expuestos precedentemente, cabe consignar que el centro de lo discutido corresponde a la oportunidad que tuvo el querellante para ejercer su derecho a acusar particularmente, o bien adherirse a la acusación fiscal y al hecho consecuente de que si no lo hizo dentro del plazo que el Juez a quo consideró, debe o no declararse abandonada la querella.

QUINTO: Que, determinada la controversia, deben mencionarse las normas legales cuya interpretación y aplicación deberán resolver el asunto. En primer lugar, el artículo 261 del Código Procesal Penal, establece: *“Actuación del querellante. Hasta quince días antes de la fecha fijada para la realización de la audiencia de preparación del juicio oral, el querellante, por escrito, podrá:*

a) Adherir a la acusación del ministerio público o acusar particularmente. En este segundo caso, podrá plantear una distinta calificación de los hechos, otras formas de participación del acusado, solicitar otra pena o ampliar la acusación del fiscal, extendiéndola a hechos o a imputados distintos, siempre que hubieren sido objeto de la formalización de la investigación;



- b) Señalar los vicios formales de que adoleciera el escrito de acusación, requiriendo su corrección;*
- c) Ofrecer la prueba que estimare necesaria para sustentar su acusación, lo que deberá hacerse en los mismos términos previstos en el artículo 259, y*
- d) Deducir demanda civil, cuando procediere.”*

Por su parte, el artículo 428 del mismo cuerpo legal, consigna lo siguiente: *“Efectos de la sentencia que declara admisible la querella de capítulos. Cuando por sentencia firme se hubieren declarado admisibles todos o alguno de los capítulos de acusación, el funcionario capitulado quedará suspendido del ejercicio de sus funciones y el procedimiento penal continuará de acuerdo a las reglas generales.*

Sin embargo, en el caso a que se refiere el inciso primero del artículo 425, el juez de garantía fijará de inmediato la fecha de la audiencia de preparación del juicio oral la que deberá verificarse dentro de los quince días siguientes a la recepción de los antecedentes por el juzgado de garantía. A su vez, la audiencia del juicio oral deberá iniciarse dentro del plazo de quince días contado desde la notificación del auto de apertura del juicio oral. Con todo, se aplicarán los plazos previstos en las reglas generales cuando el imputado lo solicitare para preparar su defensa.”

SEXTO: Que, de las normas recién transcritas, se desprende de la primera de ellas, que el querellante tiene como plazo para ejercer sus derechos en relación a la acusación particular o su adhesión, hasta 15 días antes de la fecha fijada para la audiencia de preparación de juicio oral; y de la segunda de las normas citadas se tiene que la referida audiencia se fijará de inmediato y deberá celebrarse dentro de los 15 días siguientes a la recepción de los antecedentes, siempre y cuando la situación se encuentre comprendida en lo dispuesto en el inciso primero del artículo 425, del mismo cuerpo legal.

SÉPTIMO: Que, de las señaladas normas, aparece, entonces, que, efectivamente, existe una antinomia o incompatibilidad entre



ambas, puesto que, en definitiva del análisis de las mismas no quedaría espacio de tiempo en que el querellante pueda ejercer los derechos que la ley le franquea, esto es, presentar querella particular o adherirse a la fiscal, entre otras.

OCTAVO: Que, para resolver la contradicción recién anotada, debe preferirse la interpretación de las normas que brinden mayor protección y respeto a los derechos de los intervinientes. En efecto, se alegó en estrado que debe primar al respecto al principio *in dubio pro reo*, sin embargo, estiman estos sentenciadores, que dicho principio no puede primar a costa de la vulneración de un legítimo derecho de otro interviniente, por lo que debe doblegarse ante las facultades que aún le confiere la ley, en este caso, al querellante para ejercer sus prerrogativas.

En otro orden, debe considerarse, además, que el artículo 428 del Código Procesal Penal, si bien se refiere a la oportunidad en que debe fijarse la audiencia de preparación de juicio oral, en que establece un término más acotado al tratarse de una norma especial, dicho precepto no se refiere ni contempla la situación del querellante, ni el momento en que éste pueda ejercer sus derechos en relación a la acusación, por lo que necesariamente, y respetando su legítimo derecho a ejercer tales facultades, debe permitírsele ejercerlas en el proceso, a fin de no vulnerar su genuino interés en seguir adelante con su pretensión acusatoria y punitiva. Por este motivo, la especialidad de la norma del referido artículo 428 del Código Procesal Penal se desvanece ante la privación de un interviniente, en este caso el querellante, a ejercer sus derechos procesales que, de lo contrario, lo excluyen ilegítimamente de participar del juicio, según corresponda a sus intereses.

Por otro lado, el argumento esgrimido por la defensa de la capitulada, en cuanto a que la orden de no innovar decayó cuando se declaró la admisibilidad de la querella de capítulos, pudiendo entonces ejercer sus derechos la parte querellante, debe desestimarse, dado



que la oportunidad legal para ejercer tales facultades por parte de la querellante se relaciona directamente con la fijación de la fecha de la audiencia de preparación de juicio oral, en que si ésta no se encuentra establecida, no puede determinarse la época o momento para impetrar tales derechos, por lo que solo puede hacerlo una vez fijada la fecha de tal audiencia.

NOVENO: Que, además de lo anterior, cabe hacer presente que, en el caso del querellante, éste tiene el derecho a conocer con toda exactitud y certeza la oportunidad en la que puede ejercer sus derechos procesales y, en el caso de autos, si bien dicho interviniente pudo conocer la fecha de inicio de dicho lapso, que sería desde el momento en que el Ministerio Público dedujo la acusación fiscal, no pudo conocer en definitiva hasta qué momento podía ejercer tales derechos, puesto que la única norma que señala dicha época, es el artículo 261 del Código Procesal Penal, al establecer que lo puede hacer hasta 15 días antes de la audiencia de preparación de juicio oral, sin embargo, la fecha de esta audiencia, solo se conoció en la resolución de fecha 20 de julio de 2022, en que se fijó para el día 3 de agosto siguiente, por lo que, siguiendo el cómputo de la norma recién citada, pudo el querellante ejercer sus derechos hasta antes del día 19 de julio, momento en que aún no se conocía la fecha de la audiencia porque ésta se fijó al día siguiente.

La falta de certeza recién anotada perjudica directamente al querellante, puesto que el cómputo del plazo para ejercer sus derechos se determina legalmente desde la fecha fijada para la audiencia respectiva, y si aún no se ha fijado ésta, no puede el querellante saber hasta qué momento puede hacer uso de sus facultades.

DÉCIMO: Que, finalmente, se hace necesario consignar los principios jurídicos que motivaron al Ejecutivo para implementar el actual Código Procesal Penal, entre los cuales se encuentra el que se establece en el Mensaje que dirige a la H. Cámara de Diputados, el 9



de junio de 1995, que se estima atingente a la cuestión suscitada en estos autos. Dicho texto señala en el último párrafo del numeral 2), titulado “*Principios Básicos*”, lo siguiente: “*Otro de los principios generales del sistema propuesto consiste en la aplicación directa de las normas constitucionales e internacionales de derechos humanos relevantes en cuanto a la regulación del procedimiento penal. Esta disposición obedece a la necesidad de reforzar la noción de que el procedimiento penal se organiza a partir del desarrollo de los principios generales del ordenamiento jurídico que regulan la relación entre el Estado y los ciudadanos y que se encuentran recogidos en esos cuerpos normativos. En este sentido, se trata de resaltar la importancia de estos principios por sobre los mecanismos procesales específicos consagrados en la ley. Los jueces deberán trabajar integrando las normas procedimentales con las de carácter constitucional e internacional, interpretando y aplicando las primeras de modo que den cumplimiento a las exigencias contenidas en las dos últimas.*”

UNDÉCIMO: Que, en mérito de estas argumentaciones y, a fin de resguardar los derechos de todos los intervinientes en estos autos y que todos ellos puedan ejercerlos oportunamente, resolviendo la contradicción presentada entre las normas citadas, y ante el silencio del artículo 428 del Código Procesal Penal, en relación al momento en que el querellante puede ejercer sus prerrogativas legales, deberá necesariamente seguirse lo dispuesto en el artículo 261 de dicho texto legal, en cuanto a la oportunidad para que el querellante ejerza sus derechos, dejándose sin efecto lo actuado en la causa y retrotrayéndola al estado que se expresará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 120, 261, 370 y 428, todos del Código Procesal Penal, se declara que **SE REVOCA**, sin costas, la resolución apelada, de fecha tres de agosto de dos mil veintidós, en cuanto por ella se rechazó el recurso de reposición deducido por la parte querellante y se declaró el



abandono de la querella presentada por dicha parte y, en su lugar, se resuelve que se acoge dicha reposición y se rechaza la solicitud de la defensa de la capitulada, en orden a que se declare el abandono de la querella, debiendo retrotraerse la causa al estado de fijarse por el Juzgado de Garantía de Coyhaique la fecha de celebración de la audiencia de preparación de juicio oral, en los términos que establece el artículo 261 del Código Procesal Penal, debiéndose ésta celebrar con todos los intervinientes que se han presentado en la presente causa.

Teniendo conocimiento que los antecedentes se encuentran actualmente radicados en el Tribunal de Juicio Oral de Coyhaique, bajo la vigencia de una orden de no innovar, transcríbase la presente resolución a dicho Tribunal, a fin que remita los antecedentes al Juzgado de Garantía de Coyhaique, con el objeto de cumplir con lo ordenado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular don Sergio Fernando Mora Vallejos.

Rol Corte N° 171-2022 (Penal).



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Coyhaique integrada por Ministro Presidente Sergio Fernando Mora V. y los Ministros (as) Pedro Alejandro Castro E., Jose Ignacio Mora T., Natalia Rencoret O. Coyhaique, trece de septiembre de dos mil veintidós.

En Coyhaique, a trece de septiembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

